

informe final

FASCÍCULO 4 EL IMPACTO PSICOSOCIAL, SOCIOPOLÍTICO Y SOCIOECONÓMICO DE LOS AÑOS VIOLENTOS SOBRE LA POBLACIÓN RURAL AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO INTERNO

MARTÍN PAUCA / PERÚ.21



Las cicatrices de
la guerra interna

La fractura interior

Las dos décadas de violencia dejaron en un considerable sector de la población múltiples secuelas de índole psicológica. Algunas de éstas se manifestaron de manera inmediata. Otras se dieron a conocer en el proceso del desarrollo de individuos, familias y comunidades como producto del impacto de hechos que no pudieron ser procesados. Para miles de personas, la violencia a la que estuvieron expuestas durante veinte años fue una experiencia traumática, vivida como una ruptura de su proceso vital. El impacto y la intensidad de los hechos tuvieron un carácter desestabilizador y desestructurante que desafió y en muchos casos rebasó la capacidad psicológica de defensa, lo que dio lugar a sufrimientos graves, tanto físicos como emocionales y, en algunos casos, a un trastorno duradero de la organización psíquica. Las secuelas psicológicas que a continuación se presentan fueron identificadas mediante el análisis y codificación de una muestra de 401 testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).



MARTÍN PAUCA / PERÚ.21

El conflicto armado interno dejó profundas secuelas psicológicas en los planos individual y colectivo.

Miedo y pena

Más de la mitad de los entrevistados (53.3%) mencionan espontáneamente al miedo como uno de los sentimientos experimentados durante la ocurrencia de los hechos violentos, convirtiéndose así en la reacción más frecuente. Su carácter generalizado se evidencia además en el 44% de entrevistados que lo califica como una experiencia colectiva y, cuando se trata de describir la vivencia de las comunidades durante los años del conflicto, las referencias a estados sostenidos de vigilancia y temor alcanzan un 16.2%. Ade-

más, el 21.3% señala haber pasado por condiciones extremas para salvar su vida y la de sus familiares, un 21.6% refiere haberse sentido en medio de dos bandos y sin posibilidad de defensa, y el 33.3%, es decir, una de cada tres personas, relató o recordó la muerte o huida de líderes de la comunidad y la sensación de inseguridad derivada de tal ausencia.

Por otra parte, casi la mitad de los testimonios (46.2%) da cuenta de un grado de tristeza muy profunda.

JOHN RILEY / CVR



Tres de cada 10 mujeres señalaron que su proyecto vital fue interrumpido.

Desamparo

Las personas cuyas comunidades fueron objeto de incursión violenta, arrasamiento y masacre, experimentaron desamparo (38.2%) y tristeza (32.4%) entre otros sentimientos. El de ruptura del proyecto de vida fue intenso, alcanzando un 38.2% de los testimonios. Por otro lado, un 20.6% refirió intentos de seguir adelante a pesar del horror vivido y un 14.7 de éstos últimos señala que ante un estímulo vuelven a vivir y a recordar lo sucedido. Por otra parte, un 8.8% de entrevistados señala sentimientos de desconfianza, especialmente hacia las instituciones del Estado.

Ante los ataques, las comunidades se defendieron usando diversos recursos. El 20.6% de los testimonios da cuenta de las nuevas organizaciones sociales que se crearon a raíz de la violencia y el 24.7%, es decir, una de cada cuatro personas, refiere que participó en la defensa o soporte de miembros de su comunidad.



Desamparo y tristeza, los sentimientos más comunes en comunidades arrasadas

LA REPÚBLICA



El miedo fue una experiencia colectiva.

No te olvido

Un 20.8% de viudas ha señalado sentir resentimiento u odio por lo que les ocurrió y el 34.7% (tres de cada 10 mujeres) expresa que su proyecto personal fue bloqueado o roto con la muerte de su esposo. Un 43.6% (casi la mitad) se siente desamparado. Muchas viudas no han tenido la oportunidad de poder expresar abiertamente sus sentimientos dolorosos (el 28.7% lo señala) y muchas manifiestan su dolor a través de malestares físicos: 22.8% de las viudas sufren de dolores de cabeza, 13.9% ideas y sentimientos persecutorios, y 8.9% problemas para dormir.

LA REPÚBLICA

Desesperanza

Los testimonios de quienes manifestaron haber sido víctimas directas de violación sexual revelan que, durante la experiencia misma de abuso o durante el período en que éste fue cometido, los sentimientos más comunes fueron miedo intenso (93.3%), humillación (66.7%), desesperanza y resignación (46.7%), desamparo (46.7%), desconcierto e incapacidad para responder a la agresión (40%) y desesperación (40%). Entre las secuelas o efectos posteriores a la violación sexual reportados, los más frecuentes son los sentimientos de abandono o desamparo (40.7%) y la sensación de haber visto truncado su proyecto de vida y su proyección hacia el futuro (40%).

Principales hechos reportados



UNA DE CADA TRES PERSONAS

relató o recordó la muerte o huida de líderes de la comunidad y la sensación de inseguridad derivada de tal ausencia.

Ser humano

Las secuelas o efectos posteriores más comúnmente asociados a la experiencia de la tortura son las pesadillas, los síntomas de ansiedad (como la sudoración de las manos) y la aparición de malestares físicos o enfermedades vinculadas a los maltratos sufridos.

Durante los hechos de violencia, los sentimientos de humillación, desprecio o privación de la condición de seres humanos (como el ser «tratados como animales») fueron los más comunes.



La violencia armada deterioró las formas de interacción y representación social de las comunidades rurales afectadas por el conflicto.

La desintegración social

El impacto de la violencia en la vida cotidiana de las zonas rurales afectadas por el conflicto armado trascendió el ámbito privado o familiar y se instaló en la colectividad de manera constante, erosionando las formas de relación entre los miembros de las comunidades y deteriorando las instituciones representati-

vas y los canales de participación política.

Para comprender cabalmente el fenómeno es necesario recordar que para la población campesina y nativa la comunidad no es sólo el referente fundamental de su identidad social, sino también la que conecta simbólicamente a las personas entre sí y con la

naturaleza. Por ello, la violencia ejercida por los grupos terroristas y los agentes del Estado alteró la cosmovisión de los pobladores del campo afectados por el conflicto, y por tanto sus patrones de conducta y organización.

El desplazamiento masivo, fenómeno fundamental en la medida en que

sintetiza la destrucción de la organización comunal, la instalación de formas anárquicas y desorganizadas de vida, la exacerbación de conflictos locales y la imposición de autoridades ilegítimas, son los elementos que determinaron la paulatina destrucción del orden social en el campo. Un orden que hoy es difícil de recuperar.

FAMILIAS E INCLUSO COMUNIDADES enteras salieron de los lugares en que habitaban para buscar espacios menos hostiles. Este fenómeno tuvo un carácter masivo y extendido, sobre todo en el campo. El desplazamiento se inició con la partida de adolescentes y jóvenes, objetivos predilectos de los reclutamientos forzados y las detenciones arbitrarias, seguidos por las autoridades y los pobladores con mayores recursos. La huida no solo despojaba las comunidades, sino que además las desestructuraba. Perdían a sus jóvenes, sus autoridades, sus maestros, y la sensación de desorganización e inseguridad frente a tales ausencias producía nuevos desplazamientos.

La decisión de desplazarse en búsqueda de protección y seguridad suponía un sinnúmero de pérdidas que deben ser entendidas en una situación económica y cultural en la cual la tierra es la principal fuente de supervivencia y, junto a la vivienda, es la más importante, cuando no la única, propiedad de los campesinos. Si bien en algunos casos existía la posibilidad de vender las propiedades antes de desplazarse —lo cual no deja de constituir una pérdida—, en la mayoría de ocasiones esto no era posible por el carácter desesperado y necesariamente clandestino de la salida de la comunidad. No es difícil entender entonces por qué el grueso de la población desplazada hacia las ciudades constituyera el grupo más pobre entre los pobres y que haber perdido vivienda, tierras y animales, desalentara a los potenciales retornantes.

Si bien la idea y el deseo de re-

torno se mantuvieron presentes, especialmente en los adultos, para quienes pudieron hacerlo no siempre fue fácil, pues se había registrado una modificación de la composición sociodemográfica de la comunidad y un cambio en las relaciones de poder (hoy en día buena parte de los líderes y los comuneros son jóvenes). En sentido inverso, los niños y los jóvenes retornantes, acostumbrados al ritmo de vida de las ciudades, tuvieron dificultades para adaptarse al campo.

El reino de la desconfianza

Las comunidades se vieron envueltas en acciones violentas provocadas por personas desconocidas y más tarde por sus mismos paisanos, en muchas ocasiones sin ningún motivo comprensible. Estos acontecimientos generaron suspicacias entre los pobladores y difundieron un clima de desconfianza que sumado a la impotencia convirtieron el espacio social relativamente ordenado en un ámbito caótico y sin rumbo.

Además, las estrategias de los grupos armados terminaron por confundir a las personas. Subversivos y fuerzas del orden solían atribuirse la identidad del contrincante, lo que contribuyó a crear estereotipos de grupos y personas que al final terminaron estigmatizando a ciertos grupos sociales, los que fueron excluidos, discriminados o eliminados, en la medida en que eran considerados enemigos.

La destrucción del espacio social empezaba con la toma de pueblos y la expropiación de los locales considerados comunales. Se declaraban «zonas liberadas» y se establecían bases



La presencia de elementos ajenos a la comunidad provocó miedo y desconfianza.

LAS INCURSIONES

ARMADAS de los grupos subversivos desarticularon la vida cotidiana de las poblaciones y destruyeron las normas que orientaban su dinámica interna. Todas las acciones invasivas ahondaron el desorden de la vida comunal, lo que en muchos casos se tradujo en anomia.

militares en medio de las poblaciones. En este clima, los abusos se incrementaron tanto por parte de los grupos alzados en armas como por parte de los soldados o policías, que buscaban la sumisión inmediata de la población y demandaban servicios diversos, ya sea a cambio de una «libertad» basada en la instauración de un nuevo orden social o por el ofrecimiento de seguridad. En ambos casos, lo que ocurría en la práctica era una apropiación forzada de los espacios culturalmente pautados y, a la postre, una invasión del espacio social y la eliminación de la relativa tranquilidad de la población.

Quienes vivían en las zonas liberadas o alrededor de las bases militares perdían su libertad pues estaban a merced de quienes portaban armas, y con el paso del tiempo, se acostumbraron a vivir sometidos o protegidos. >>>



Quienes vivían en zonas liberadas o cerca de bases militares perdieron su libertad.

>>> Mal ejemplo

Por otra parte, el comportamiento de quienes portaban armas, dada la impunidad con la que actuaban, se convirtió en muchos casos en un modelo para el sector más joven de la población. Es así que las distintas formas de delincuencia que aparecieron en las zonas de mayor conflicto no sólo fueron consecuencia de la ausencia de autoridades sino también de la presencia de modelos sociales que mostraban que muchos problemas se podían resolver mediante la violencia.

Así, las zonas en emergencia se vieron rápidamente inundadas por asaltos, robos sistemáticos y pandillaje, lo que afectó durante mucho tiempo a comerciantes y pobladores. La violencia había ganado las calles y carreteras y se había convertido incluso en un modus operandi a través del cual los jóvenes reproducían los hábitos de conducta impuestos en su entorno social. Los mecanismos culturales formados durante mucho tiempo habían sucumbido. Los testimonios recogidos por la CVR reflejan a menudo cómo la juventud perdió horizontes y transgredió constantemente las normas de convivencia social.

La usurpación del poder

Las acciones subversivas estuvieron especialmente dirigidas en contra de aquellos líderes que se encontraban más estrechamente ligados con sus comunidades, organizaciones y municipios lejanos. Su eliminación fue un objetivo central del PCP-SL para poder controlar a las poblaciones, primero, y sustituir a las dirigencias, después.

La implantación del poder por medio de las armas tuvo distintas formas. Una de ellas se dirigió al conjunto del centro poblado. Esto sucedía, por ejemplo, cuando las columnas de Sendero Luminoso llegaban a una comunidad convocando autoritariamente a asambleas o a trabajos forzados o imponiendo un nuevo modelo de organización que desconocía y desvalorizaba aquél que la comunidad ya tenía. O sucedía también cuando las Fuerzas Armadas llegaban en patrullas a las comunidades para buscar sospechosos —acusando indiscriminadamente a los pobladores en muchos casos— y para recomponer o imponer un orden.

La imposición de alguna autoridad en una localidad producía desconcierto y desequilibrio en la organización existente, pero también confusión y anarquía. Desconcierto y desequilibrio en la medida en que los verdaderos representantes eran eliminados fisi-

LAS DISTINTAS FORMAS

de delincuencia que aparecieron en las zonas de mayor conflicto no sólo fueron consecuencia de la ausencia de autoridades sino también de la presencia de modelos sociales que mostraban que muchos problemas se podían resolver mediante la violencia.

ca y simbólicamente para ser sustituidos por otros. Confusión y anarquía en la medida en que la desaparición de las autoridades daba paso al descontrol en la comunidad, menguando con ello los sentimientos de seguridad e identidad de la población.

En tales circunstancias, los pobladores trataron de amoldarse a las exigencias y acatar las órdenes del grupo que imponía el mandato. Las autoridades reemplazadas no tenían legitimidad ni eficacia alguna ante la población y eran sometidas a permanentes controles por parte de quienes portaban las armas. La ausencia de autoridad era



Las mujeres pasaron por experiencias violentas diferentes a las de los varones.

LA REPÚBLICA



La desaparición y muerte de autoridades legítimas dio paso al descontrol y la anarquía en las comunidades campesinas.

LOS CONFLICTOS INTERNOS

LA REPÚBLICA

Los grupos subversivos trataron de aprovechar las contradicciones surgidas en la colectividad y los descontentos de la población para ejercer su dominio. Los conflictos por tierras o acceso a recursos naturales, las revanchas familiares y los enconos personales de origen diverso sirvieron como motivación para enfrentar a los pobladores entre sí cuando los terroristas lo consideraron necesario.

Al llegar a las comunidades y pueblos los grupos subversivos establecían contactos y nombraban líderes, instauraban un «nuevo orden» basado en una disciplina rígida acompañada de gestos concretos de moralización. De este modo, en un primer momento, encontraron cierto grado de aceptación por parte de algunas comunidades, pues su presencia coincidían con el anhelo de orden y justicia en las poblaciones. Ese «nuevo orden» fue propicio para denunciar a las autoridades por malversación de fondos públicos o para acusar a personas importantes de la localidad.

El discurso del «nuevo orden» caló en muchos pobladores, sobre todo cuando eran testigos de gestos concretos de imposición de disciplina y moral. El castigo a los poderosos constituía una señal de justicia y la instauración de una nueva experiencia igualitaria, la ausencia aparente de brechas entre pobres y ricos. Sin embargo, no todos los miembros de

una comunidad estaban de acuerdo con las nuevas maneras de proceder, lo que provocó mayores tensiones entre los pobladores.

Las envidias y los rencores entre los pobladores generaron mayor desconfianza e incertidumbre, sobre todo cuando sin ninguna razón algún miembro de una familia, por ejemplo, no era castigado por los senderistas, cuando otros esperaban tal castigo. También la prosperidad de algunos era motivo de enemistades, dudas y sospechas por parte de la comunidad.

Por otra parte, la partida abrupta de las comunidades produjo el abandono de bienes y terrenos, los que empezaron a ser utilizados por quienes permanecieron en la comunidad con la expectativa de convertirse en propietarios, para lo que, en algunos casos, contaban con la anuencia de las autoridades de facto. Pasado un tiempo, muchos comuneros o propietarios retornaban a sus lugares de origen, pero encontraban que sus bienes habían sido tomados en posesión por otros, incluso de manera formal. Ante esto, los nuevos dueños utilizaron una serie de amenazas y artimañas para mantener la propiedad ilícitamente adquirida, incluso denunciando a los antiguos dueños como terroristas.

Los comités de autodefensa
Al verse atacadas y violentadas, las



Algunos CADs no fueron ajenos al empleo de violencia indiscriminada.

comunidades buscaron defenderse usando diversos medios, como la formación de rondas campesinas y nativas por ejemplo, o adoptando actitudes religiosas que en algunos lugares se constituyeron en estrategias para la supervivencia.

Las rondas campesinas y nativas eran medios de protección y resguardo de las comunidades y, a la vez, signos de alianza con las Fuerzas Armadas. A pesar de existir iniciativas propias de las comunidades para formar rondas o comités de autodefensa en sus zonas, la mayor parte de las experiencias recogidas dan cuenta de cierta presión por parte de las Fuerzas Armadas y Policiales para que se consti-

tuyesen grupos armados civiles.

Algunas organizaciones de defensa fueron implementadas con mayores recursos, como armas modernas, apoyo de la comisaría de la zona o apoyo de otras rondas. En tales casos se fortaleció el papel que cumplían en la zona. Sin embargo, en el clima violento en el que se vivía no fueron ajenas al empleo de los mecanismos de control y amenaza utilizados por miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Tales mecanismos llegaron en ocasiones hasta al asesinato de personas consideradas terroristas. Esto añadió mayores elementos que profundizaron la enemistad que existía con otros pueblos.

vivida por muchos pobladores como una situación de zozobra.

Así, los sentimientos de miedo e inseguridad entre los pobladores repercutieron en el aspecto social-organizativo de las comunidades, lo que se tradujo en el debilitamiento de la organización comunal.

Organización quebrada

Una de las consecuencias del abuso de poder y de la usurpación de funciones fue el debilitamiento del sistema normativo de la organización comunal. El PCP-SL, al reclutar sobre todo a jóvenes, los inició en una escuela que en lugar de defender la construcción y respeto de un orden les enseñó a transgredir los criterios de autoridad ancestralmente construida. Y es que la ausencia de los jóvenes sin el debido consentimiento de los ma- >>>



El miedo e inseguridad se tradujeron en el debilitamiento de la organización comunal.

PERÚ.21

APROXIMADAMENTE

2.267 autoridades y dirigentes campesinos fueron asesinados o desaparecidos durante los años más violentos del conflicto armado interno.

>>> yores fue una suerte de «desobediencia» a la autoridad establecida, que poco a poco fue incrementándose. Luego del adoctrinamiento y con un arma en la mano, los jóvenes se convertían en personas importantes frente a la población y consideraban como enemigo a todo aquel que osaba oponerse o discrepar. En consecuencia, el sistema tradicional de rotación de cargos dentro de las comunidades fue sistemáticamente destruido por los que

usurpaban sus funciones

Ante la ausencia de la autoridad por eliminación, huida o sustitución, el espacio se convertía en «tierra de nadie», un lugar donde no se podía ni siquiera mantener las instituciones públicas y registrar la historia cotidiana, los nacimientos, los muertos y los matrimonios.

De otro lado, la marcha de la vida ciudadana se vio alterada debido a la lucha por el control hegemónico del terri-

torio. Los pobladores tenían que «pedir permiso» a las autoridades de facto para poder movilizarse. De este modo, la libertad de libre tránsito y otros aspectos de la vida ciudadana no solo se vieron suspendidos, sino que también se imposibilitaba seguir con el sistema de intercambio y el mercado, creando un espacio reducido, controlado y sin salida.

Hoy, la ley y el orden secuestrados por la violencia del conflicto armado interno tienen muchas difi-

cultades para rehacerse. El anhelado proyecto de renovación dirigencial enfrenta un difícil punto de partida, pues la pérdida de dirigentes a causa de los asesinatos, las desapariciones y los desplazamientos forzados, ha interrumpido la transmisión del aprendizaje social que significa asumir el liderazgo. También ha traído, por el temor y la desconfianza, a quienes correspondería asumir el papel de las tareas directivas.

MODELOS DE MUJER

La CVR no puede dejar de señalar que las mujeres, por el hecho de serlo, pasaron por experiencias violentas específicas y diferentes a las vividas por los varones.

La mayoría de las afectadas pertenecían a la zona quechua hablante de la sierra sur del país. Se trataba de jóvenes campesinas con escasos niveles educativos que se vieron en medio de un fuego cruzado.

La violencia de los miembros de las fuerzas del orden y del PCP-SL las golpeó de maneras distintas: los primeros las violaban, los segundos las quemaban. Unos abusaban de su cuerpo poseyéndolo y dominándolo, mientras que los otros lo aniquilaban con torturas. En ambos casos, se trató de abusos injustificados e intolerables que dejaron huellas personales y colectivas.

Por otra parte, la CVR considera que como consecuencia del conflicto armado interno, el orden de género se alteró afectando la vida y las identidades de varones y mujeres. La imagen del varón responsable, proveedor del hogar y protector de la familia se desplazó hacia la mujer, quien se encargó de cumplir estas funciones mientras los hombres enfrentaban a los grupos subversivos. La mujer se convirtió así en la proveedora y en la responsable de la salud y bienestar colectivo. También recayó en ella la función de buscar a sus seres queridos muertos y desaparecidos.

Así, muchos modelos tradicionales de feminidad fueron trastocados dando lugar a la renovación y emergencia de nuevos símbolos.

Un primer símbolo renovado es el de la mujer madre y esposa, que aparece con una fuerza y vitalidad impresionantes. Ellas, en la búsqueda de los suyos, lucharon y se en-



MARTÍN PAUCA / PERÚ.21

Muchos modelos tradicionales de feminidad fueron trastocados dando lugar a la renovación y emergencia de nuevos símbolos.

LA MUJER se convirtió en la proveedora y en la responsable de la salud y bienestar colectivo. También recayó en ella la función de buscar a sus seres queridos muertos y desaparecidos.

frentaron al poder institucional y en este camino generaron espacios de construcción ciudadana.

Una segunda manifestación es la mujer «guerrera». Eran las mujeres del PCP-SL y de los otros grupos subversivos. Se trató de mujeres cuya apuesta suponía una negación de su identidad de madre o esposa, pues el ocuparse de la familia era visto como una muestra de debilidad que debían superar para que no interfiriera con las tareas que el partido les encomendaba.

Una tercera manifestación es la de la mujer líder de organizaciones, que se opuso y enfrentó a los grupos

subversivos. Se trató de mujeres del pueblo, capacitadas y con capacidad de conducción, quienes adquirieron en ese proceso una mayor valoración social.

Finalmente, tenemos a las mujeres como víctimas sufrientes. Ellas representan a un tipo de mujer dolido, sin capacidad de acción, incapaz de enfrentar su destino.

Se ha de señalar que estas múltiples imágenes y representaciones femeninas están vigentes todavía en muchas zonas del país y que además no son excluyentes sino que pueden coexistir en una persona.

Mucha más pobreza

MARTÍN PAUCA / PERÚ.21



Las poblaciones migrantes se vieron obligadas a desempeñar actividades poco rentables, lo que las empobreció aún más.

El conflicto armado interno se desarrolló en el contexto de una crisis económica nacional marcada por una fuerte recesión y golpeó con particular énfasis a las áreas rurales más pobres del país. Su efecto más visible, en el plano económico, fue la paralización del proceso de desarrollo del mundo rural. También dejó graves secuelas en la estructura productiva, la organización social, las instituciones educativas y los proyectos de vida de las poblaciones afectadas. Sumadas estas repercusiones a la destrucción y deterioro del capital humano, la destrucción de la infraestructura social y comunal, y el saqueo y destrucción de los bienes personales, resulta posible concluir que el proceso de la violencia dejó un panorama económico desolador con una inmensa cantidad de personas afectadas. En síntesis, empobreció aún más a los más pobres.

EL IMPACTO DE LA VIOLENCIA sobre el capital humano tuvo efectos dramáticos. Su destrucción por hechos como el asesinato y la desaparición forzada, y su deterioro por las secuelas físicas y psicológicas del conflicto armado, tuvieron como consecuencia la disminución del ingreso indispensable para el sostenimiento de la familia rural y una caída de su calidad de vida. Y es que, como se sabe, en la economía rural, el varón (adulto o joven) tiene a su car- >>>

>>> go las principales actividades relacionadas con la producción agrícola. De acuerdo con los testimonios recogidos por la CVR, de un total de 22,507 víctimas, el 73% desarrollaba alguna actividad económica rentable para el sostenimiento de sus familias y en su mayoría eran considerados jefes de familia.

Por otra parte, el desplazamiento de la fuerza de trabajo rural hacia otras zonas, sobre todo urbanas o urbano-marginales, generó otra debilidad en las comunidades y en las regiones. El desdoblamiento dejó a las comunidades sin mano de obra, con lo que se redujeron las posibilidades de desarrollo económico de quienes permanecieron en ellas.

Pero el desplazamiento no sólo empobreció a la comunidad, sino también a los mismos desplazados. Cuando el conflicto se apaciguó un poco algunas familias comenzaron a retornar, pero las condiciones socioeconómicas que encontraron en sus pueblos y la poca ayuda estatal que recibieron hizo insostenible su permanencia, por lo que tuvieron que desplazarse nuevamente a zonas de refugio donde la falta de trabajo las empujó a ubicarse en actividades del sector informal o de poca rentabilidad.

Abandono de tierras

El conflicto armado interno empujó a las familias y comunidades afectadas a dejar sus pueblos y abandonar sus casas, tierras productivas, ganado y bienes de todo tipo. Según la encuesta del INEI de 1997, el 71.4% de la población tenía en su lugar de origen alguna forma de propiedad como vivienda, tierras y/o ganado, y sólo el 28.6% no tenía bienes.

Por otra parte, la violencia que enfrentaron los pobladores fue tomada por ellos como un factor a considerar en sus decisiones económico-productivas. Algunas familias continuaron sembrando en sus chacras, pero les dedicaban el menor tiempo posible por la presencia del PCP-SL. También buscaron minimizar las pérdidas de sus cultivos sembrando menores cantidades de hectáreas para reducir el riesgo de perder la inversión frente a nuevos ataques del PCP-SL. Su objetivo no era, pues, sólo el de garantizar la producción sino, también, el de asegurar su supervivencia.

Así, la extensión de los sembríos agrícolas se redujo drásticamente, afectando seriamente los ingresos de las familias campesinas.

Según el III Censo Nacional Agropecuario de 1994, la superficie

Agricultura

Superficie agrícola que no será cultivada por causa principal (1994).

Localidad	Total (*)	Causa principal			
		Terrorismo	Falta de mano de obra	Consiguió otro trabajo	Robo
Nacional	1'745,773	10,575	84,312	4,853	3,015
	35'381,808	30,655	104,498	5,368	1,615
Ayacucho	87,263	4,608	6,655	265	74
	1'715,207	8,665	4,381	156	32
Junín	118,360	2,115	4,301	320	190
	2'264,730	13,093	6,124	492	82
Huancavelica	85,337	758	5,460	561	138
	1'305,491	621	2,360	201	42
Puno	184,610	776	31,764	1,246	1,249
	4'384,904	366	2,277	164	117
Huánuco	93,156	571	4,386	390	200
	1'343,787	2,695	34,088	401	355
Apurímac	68,430	255	5,816	178	158
	1'437,144	222	1,375	54	54
Pasco	28,079	119	2,115	549	156
	997,807	795	5,720	1,482	70
San Martín	63,062	117	2,184	91	72
	1'107,356	1,148	12,001	561	171

(*) Incluye otras variables que aparecen en la encuesta. FUENTE: INEI-III Censo Nacional Agropecuario 1994

Unidad de medida: ■ Unidades agropecuarias ■ Hectáreas

agrícola que no habría sido cultivada debido a la acción terrorista llegó a 30,655 hectáreas. El censo señala también que, además del terrorismo, la falta de mano de obra para el trabajo en el campo y el cambio de ocupación laboral, incidieron en esta situación. Las zonas más afectadas fueron las de Junín y Ayacucho. Según la encuesta del INEI de 1997, en Junín se habrían dejado de cultivar, a fines de 1996, aproximadamente trece mil hectáreas y en Ayacucho cerca de nueve mil hectáreas.

Robo y destrucción

Tanto los grupos alzados en armas como los miembros de las fuerzas del orden atentaron directamente contra los derechos personales y los bienes de los pobladores.

El ganado vacuno y ovino, que

Pérdidas materiales

De una familia campesina promedio (2002-costo en nuevos soles).

Total (*)	Costo
Vivienda (módulo de calaminas)	17,922
Dotación de herramientas (módulo)	981
Dotación de vajilla de cocina (módulo)	1,300
Módulo de arado	400
Dotación de trilladoras (módulo)	1,220
Dotación de frazadas (módulo)	4,470
Ovejas (2)	92
Animales menores (módulo)	840
Semilla de papa (S/. 8,575/ha) *3 has.	8,575

(*) Equivalente a US\$ 5,120 (S/. 3.5-US\$ 1) Estimados a partir de costos calculados por el PAR.

ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL / PERÚ.21



Familias y comunidades dejaron todo en su huida hacia zonas urbano marginales.

constituye una forma de ahorro para la familia rural, disminuyó notablemente debido a que fue robado y eliminado por el PCP-SL y las fuerzas del orden, en algunos casos y, en otros, porque la propia población los vendió a un precio inferior a su valor real para poder contar con recursos económicos y emigrar. En general, la población sufrió la apropiación ilícita y destrucción de su ganado y de todos los animales de que disponían para su subsistencia.

Por otra parte, los grupos subversivos incursionaban en las comunidades y se apropiaban de los bienes de los comerciantes pudientes de las zonas, pero también de las pequeñas tiendas o negocios particulares de las poblaciones. El saqueo y el incendio de casas y locales también fueron prácti-

LAS REGIONES más duramente afectadas por el conflicto experimentaron una disminución de la Población Económicamente Activa (PEA). Las de Ayacucho y Huancavélica registraron, entre períodos censales, una reducción de 154 mil a 131 mil y de 107 mil a 104 mil trabajadores, respectivamente.

ca común por parte del PCP-SL.

En cuanto a las fuerzas del orden, éstas también actuaron con violencia, abuso y discriminación. Mientras las bases militares permanecieron en algunas comunidades, no perdieron la oportunidad de saquear los po-

cos bienes de los campesinos. También se apropiaron de los bienes que la población abandonó al huir de la violencia en sus pueblos.

El robo de animales y de comestibles, en general, fueron formas de destrucción de las principales fuentes de riqueza y subsistencia de campesinos y pobladores. La pérdida y destrucción de sus bienes y propiedades alcanzó niveles muy altos, al punto que muchos lo perdieron todo cuando sus viviendas y medios de subsistencia fueron quemados.

Organización del trabajo

El desequilibrio generado por el conflicto armado en la vida familiar o comunal se expresó en los cambios que afectaron directamente las maneras de relacionarse entre sí de los grupos y de las personas. Las antiguas formas de cooperación y colaboración personal y colectiva perdieron vigor y sufrieron alteraciones que afectaron, de maneras y grados diversos, a sus miembros y a sus espacios institucionales.

La organización económica basada en el ayni y la minka se vio severamente

dañada porque estas instituciones fueron utilizadas por los actores de la violencia de manera distorsionada para fines no contemplados en la idiosincrasia comunal. Tanto el ayni como la minka son formas de intercambio que implican largos años de relaciones basadas en el conocimiento del otro, apoyadas en la seguridad de que los servicios prestados serán devueltos en una oportunidad futura. La confianza constituía, pues, la base fundamental de la continuidad de las relaciones sociales y económicas. Pero las relaciones de confianza fueron destruidas para dar paso a otras formas de relación basadas en principios individualistas. Así, el trabajo comunal dejó de ser una institución que cohesionaba a los individuos para lograr beneficios de manera colectiva y, de ese modo, fortalecer al grupo.

La escuela como peligro

El sentido del desarrollo de las comunidades se vio alterado por la presencia de factores externos que trastocaron la escuela, espacio muy importante para la promoción de la movilidad social.

Las acciones del PCP-SL no sólo habían corrompido la función de la escuela, sino que la convirtieron en un espacio peligroso para la comunidad. En las aulas los pobladores eran aleccionados en la doctrina de la subversión, o eran incluso asesinados. Esa circunstancia produjo la huida de alumnos y profesores.

También la transmisión de los conocimientos ancestrales sufrió transformaciones o mutilaciones, no sólo porque los mayores dejaron de tener la libertad y la oportunidad de transmitirlos, sino también porque se desestructuraron los espacios de socialización colectivos. Ello condujo a que muchos jóvenes dejaran de acudir a las instituciones de formación o capacitación para no verse involucrados en el proceso de la violencia.

En otros lugares, la escuela desapareció por acción de la violencia, dejando a los jóvenes a su suerte e incrementándose el analfabetismo. La imposibilidad de ofrecer una educación a los hijos se convirtió en un serio obstáculo para hallar formas de salir de la pobreza.

JORGE OCHOA / LA REPÚBLICA



Las escuelas dejaron de ser espacios de promoción del desarrollo para convertirse en lugares donde tenían lugar el adoctrinamiento y el asesinato.



En diversos momentos del conflicto, los actores armados implementaron procedimientos de selección de las víctimas basándose en criterios raciales.

La herida más antigua

La discriminación étnica y racial fue un elemento presente en el conjunto del proceso de violencia. En los diferentes momentos y ámbitos de su desarrollo, fue un factor que influyó significativamente sobre los comportamientos y percepciones de los diversos actores, aunque casi siempre de manera encubierta.

EL CONFLICTO ARMADO reprodujo en gran medida las brechas étnicas y sociales que afectan al conjunto de la sociedad peruana. La concentración de la violencia fue mayor entre la población de los márgenes sociales —indígenas, pobres y rurales— de las diversas regiones que fueron escenario del conflicto. De allí que las tres cuartas partes del total de víctimas reportadas a la CVR hayan sido quechuhablantes de los departamentos más deprimidos del país.

El PCP-SL utilizó deliberadamente su ideología totalitaria para destruir las formas de organización cultural propias de las poblaciones andinas y amazónicas, asesinando a comuneros y dirigentes, secuestrando y sometiendo a formas de esclavitud y servidumbre a comunidades enteras y reprimiendo sus manifestaciones culturales y religiosas.

Por otra parte, en nombre de la defensa del es-

tado de derecho ante la insurgencia subversiva, las fuerzas del orden también cometieron diversos abusos y crímenes de lesa humanidad, concentrados entre la población indígena de las comunidades rurales, sobre todo durante los primeros años del conflicto.

Aunque el conflicto no tuvo un carácter étnico explícito, el racismo y la discriminación fueron inmanentes a las prácticas de violencia de todos los actores, aflorando sobre todo en los momentos en que se ejerció la violencia física, mediante categorías raciales que estigmatizaron a las víctimas como indios, cholos y serranos.

En diversos momentos del conflicto, los actores desarrollaron e implementaron procedimientos de selección de sus víctimas basados en criterios raciales, que reprodujeron las brechas étnicas y aumentaron las distancias sociales, incrementando el clima de violencia.